

Cambios y permanencias en el desarrollo político y económico de Chile

Change and Permanence in the Economic and Political Development of Chile

TERESA CATALINA ROJAS MARTINI*

RESUMEN: Desde sus inicios como nación independiente, la conducción político-económica chilena ha tendido a ser representada como un proceso “estable” en comparación a otras experiencias latinoamericanas. Sin embargo, es posible advertir que, hasta el golpe de Estado de 1973, existió una disputa constante en torno a las formas y proyectos con que se pensaba el desarrollo chileno. Durante la dictadura militar se impone un modelo en particular y se abandona la búsqueda de posibles alternativas. A partir de entonces el foco de atención cambia desde la discusión sobre el modelo implementado, a las formas y los actores políticos que conducen un proceso preestablecido y cuyas bases permanecen prácticamente inmutables. A lo largo de este artículo se discuten algunas de las características de dicho fenómeno, así como se pone en relieve el papel que ocupa el Estado dentro de éste.

PALABRAS CLAVE: *Política, economía, Estado, Chile.*

ABSTRACT: Since Chile became an independent nation, its political and economic situation has tended to be labeled as “stable” compared to other Latin American countries. However, it is possible to note that until the coup d'état of 1973, there was a constant dispute over the forms and the projects of Chilean future development. During the military dictatorship a particular model was imposed and the search for possible alternatives was abandoned. Since then the focus has changed from the discussion about the implemented model to the forms and political actors leading a predetermined process the bases of which remain virtually unchanged. Throughout this article, we discuss some of the features of this phenomenon as well as highlight the role occupied by the state.

KEYWORDS: *Politics, economics, State, Chile.*

RECIBIDO: 21 de junio de 2016. **ACEPTADO:** 23 de abril de 2017.

* Teresa Catalina Rojas Martini. Maestra en Ciencias Antropológicas UAM-I, actualmente cursa doctorado en Estudios Latinoamericanos UNAM. Área de especialización: Formación estructural, desarrollo e integración de América Latina. <teresarojasmartini@hotmail.com>.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo tiene como propósito reflexionar sobre el desarrollo dialéctico de la economía y la política chilenas, así como el rol que ha desempeñado el Estado en dicha relación. Para ello, se pasa revista a ciertos aspectos del desarrollo histórico chileno, se expone de manera analítica su relevancia, tanto en la conformación estatal, como en la dinámica político-económica del país.

La idea que subyace al análisis es que desde el proceso de Independencia chilena, en adelante, el desarrollo del proyecto nacional estuvo en disputa permanente. Más allá de los gobiernos de turno y la aparente estabilidad del proceso, se observa un constante cuestionamiento sobre el tipo de modelo económico a seguir. Sin embargo, tras el Golpe Militar de 1973 dicho debate desaparece, en principio debido a la imposición violenta de la dictadura, pero tras el retorno a un régimen democrático, ya sea durante los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia (1990-2010) o el posterior gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), la discusión no se retoma. Y es que tras la invalidación jurídico-legal e ideológica de cualquier proyecto alternativo al neoliberalismo que realizó el gobierno de Augusto Pinochet, pareciera haberse generado un cambio en el foco de atención de la sociedad chilena: desde el proyecto se pasa a los ejecutores. Lo que se quiere como sociedad, una vez llegada la democracia, pierde fuerza, la idea de cambio radical, profundo, desaparece, pues se da por sentado que el objetivo, el gran cambio a partir del cual se gestaría un nuevo tipo de sociedad, distinta a la generada por la dictadura, ya fue logrado al retornar la democracia, por lo que en adelante sólo resta seguir *el arcoíris*:¹ los lemas de justicia, equidad y consenso casi no se cuestionan. Pero ¿qué significan?, ¿cuáles son sus implicancias y qué cambia además de *los colores*, la forma y los actores políticos?

Dentro de este proceso, la figura del Estado aparece como un actor clave, pues es el encargado, no sólo de gestionar la configuración de un régimen de gobierno concreto (democracia neoliberal) o de facilitar las condiciones necesarias para una determinada configuración económica

¹ La alusión a la figura del arcoíris se utiliza porque éste fue el emblema utilizado por la oposición a Pinochet durante la campaña para el plebiscito del 5 de octubre de 1988 y posteriormente pasó a formar parte de la bandera de la Concertación.

(capitalismo dependiente de orientación exportadora), sino que también a nivel sociocultural despliega una serie de elementos que permiten su viabilidad. No es casual, por ejemplo, que de manera conjunta al retorno de la democracia, se dé también la reducción de la política a un mero rito formal:² el voto, a través del cual se supone que todos los ciudadanos contarían con el mismo grado de injerencia en los asuntos públicos y las decisiones sobre la conducción del país, se convierte en la carta de legitimación de un sistema que en la práctica tiende a aglutinar el poder político a manos de las élites y dar cabida a desigualdades como la concentración de más de la mitad del PIB por parte de la quinta parte más rica de la sociedad. ¿Cómo es posible entonces que, pese a la desigualdad en términos socioeconómicos, primaran a nivel discursivo las ideas de igualdad, libertad y justicia?

El recorrido que se lleva a cabo a continuación y que intenta dar respuesta a estas interrogantes, se realiza desde una perspectiva que comprende la articulación del mundo social como una *totalidad*,³ por lo que se evidencia entonces que el Estado moderno se encuentra vinculado al proceso de acumulación del capital y que opera como una bisagra entre éste y los procesos políticos, ideológicos y culturales que interaccionan con el mismo.

EL DESARROLLO POLÍTICO-ECONÓMICO CHILENO

En tanto colonia, la Capitanía General de Chile estuvo enfocada en surtir y satisfacer las demandas de la corona española y de países centrales en donde el proceso de acumulación de capital se encontraba ya establecido. Si la conformación y desarrollo de América Latina estuvo vinculada de manera estrecha a las dinámicas del capital internacional, Chile no fue la

² La construcción social de la política es una discusión que ha sido ampliamente desarrollada. Para ahondar en ella, se sugiere revisar, entre otros, trabajos como los de: Echeverría, Bolívar (1996). Grüner, Eduardo (1999). También véase Eduardo Grüner (1999: 13-50); y Jaime Osorio (1997).

³ Se apela a la idea de Totalidad desarrollada por Karel Kosic, para quien significa: “realidad como un todo estructurado y dialéctico, en el cual puede ser comprendido racionalmente *cualquier hecho* (clases de hechos, conjunto de hechos). Reunir todos los hechos no significa aún conocer la realidad, y todos los hechos (juntos) no constituyen aún la totalidad. Los hechos son conocimiento de la realidad si son comprendidos como hechos de un todo dialéctico, esto es, si no son átomos inmutables, indivisibles e inderivables, cuya conjunción constituye la realidad, sino que son concebidos como partes estructurales del todo” (Kosic, 1962: 23 cursivas en el original).

excepción, pues, participó en el traspaso de recursos que hizo posible el desarrollo del capital comercial y bancario en los países centrales y que cimentaron el camino para el surgimiento de la gran industria (Marini, 1977). Una vez alcanzada la independencia, las características del país (pobre, pequeño y de población no muy numerosa) desalentaron la creación de un mercado interno,⁴ por lo que la exportación de bienes primarios al exterior se mantuvo, con un mercado que no se concentraba exclusivamente en Europa, sino que también incluía a Perú y Bolivia (Cueva, 2009).

Al dar continuidad a la pauta económica colonial, el gobierno autocrático de Diego Portales (1830-1860) permitió la unión política de las fracciones agrarias y comerciales de la burguesía criolla, así como facultó la gestión del marco institucional que permitió a las clases dominantes –y a la fracción conservadora dentro de éstas– organizar la sociedad en función de sus proyectos e intereses. En este sentido, comparada con el resto de las experiencias latinoamericanas, la elaboración e instauración de un proyecto nacional sobre la forma y foco del desarrollo del país fue más claro y directo (De Riz, 1979).

Todo este proceso debe ser pensado como inserto en el marco de la economía mundial y de la revolución industrial, la cual propició la articulación directa de los países latinoamericanos con los requerimientos de Inglaterra y, por tanto, su tendencia a producir y exportar bienes primarios a cambio de bienes de consumo. De acuerdo a Marini ello implicó que, pese a que se trataba de naciones formalmente independientes, se configurara desde su origen una situación de dependencia.⁵

Ahora bien, el impulso económico que supuso la explotación de cobre en el Norte Chico y carbonífera en el sur, sumada a la incorporación de nuevos mercados para la producción de trigo (como Australia, California e Inglaterra), contribuyó en la diversificación de la clase dirigente, lo que a la larga condujo al fin del gobierno de Portales. La transición a la República Liberal (1860-1891) trajo consigo la liberalización de las instituciones políticas y la eliminación de los rasgos autocráticos del Estado, el cual pasó a conformarse como un Estado oligárquico de bases más diversas. Así, el desarrollo “hacia adentro” apareció como alternativa, de

⁴ Ver Salazar y Pinto, 2002.

⁵ Dependencia “entendida como una relación de subordinación entre naciones formalmente independientes, en cuyo marco las relaciones de producción de las naciones subordinadas son modificadas o recreadas para asegurar la reproducción ampliada de la dependencia.” (Marini, 1977:18)

manera que “La oscilación desde una política proteccionista, orientada al desarrollo de la manufactura, hacia una política de afianzamiento de la economía de exportación, se sustentó en la coincidencia de intereses entre los nuevos y viejos “propietarios” del Estado.” (De Riz, 1979: 27)

La conformación del poder estatal habría acabado de afianzarse tras la incorporación de territorios que pertenecían a Perú y a Bolivia, con lo cual la economía nacional se vio beneficiada por la anexión de importantes yacimientos de cobre y salitre tras la Guerra del Pacífico (1879-1883). Por otra parte, el Estado chileno vio incrementado su poderío a partir de la expropiación de tierras a las comunidades mapuche que se ubicaban al sur del río Biobío y que llevó a cabo a través del proceso armado de “Pacificación de la Araucanía” (1861-1883), con lo cual aumentó los territorios y recursos naturales disponibles para ser económicamente explotados.

Entretanto, José Manuel Balmaceda (presidente de Chile durante el periodo 1886-1891) entabló la discusión sobre los riesgos que implicaba la concentración de la dinámica económica en la explotación del salitre, dado que el control de ésta recaía, en gran medida, en manos extranjeras, razón por la cual Balmaceda implementó una serie de políticas proteccionistas orientadas a fortalecer la economía interna. De esta manera, ya entrado el siglo xx se daría inicio a:

un primer proceso de «sustitución de importaciones» que anticipaba el modelo que reemplazaría, después de la crisis de 1929-32, al del crecimiento hacia afuera. Durante los años 20, como ha demostrado Gabriel Palma, no sólo se verifica una autonomización del crecimiento industrial respecto de la actividad exportadora, sino que la producción manufacturera se diversifica en el sentido de fortalecer el sector de bienes de consumo duradero, insumos intermedios y bienes de capital (Salazar y Pinto, 2002: 31-32).

Con todo, lecturas como las de Vitale (1980) advierten que ya para el periodo conocido como República Parlamentaria (1891-1920) el control de la economía chilena continuaría en manos extranjeras, se pasó a depender del capital inglés al norteamericano. De acuerdo a Vitale:

En un proceso de desnacionalización sin precedentes en la historia de Chile, la burguesía criolla de principios de siglo hizo entrega de las principales riquezas nacionales a las empresas imperialistas. Los gobiernos de la llamada «República Parlamentaria» trataron de justificar la entrega del salitre y del cobre con el argumento de que no había otro camino para aumentar los ingresos del Estado (Vitale, 1980: 12).

Tanto la Primera Guerra Mundial como la Crisis del 29 impulsaron el proceso de Sustitución de Importaciones (ISI). En el caso de la primera, al disminuir las importaciones desde Europa y Estados Unidos, se fomentó el desarrollo de la industria manufacturera nacional, cuya producción estuvo orientada a satisfacer las demandas de las empresas mineras y agrícolas, al igual que a la producción de artículos de consumo popular como tejidos o zapatos. Mientras que la “Gran Depresión” mermó de manera drástica, tanto exportaciones, como importaciones y, por tanto, el gasto público debió ser reducido y el Estado tendió a asumir un rol más activo, se privilegió el desarrollo hacia adentro.

Más allá de las preferencias personales de empresarios y estadistas, la viabilidad de un modelo que se sustentaba en la complementariedad económica entre naciones parecía esfumarse en un mundo que gravitaba hacia el cierre de fronteras y el proteccionismo. El aparente auge de la economía soviética, y el surgimiento en el mundo capitalista de una nueva ortodoxia basada en las ideas del británico John Maynard Keynes, eran otras tantas señales que apuntaban en la misma dirección (Salazar y Pinto, 2002: 36).

Como consecuencia de la crisis, la disputa en torno al tipo de proyecto para el desarrollo nacional vuelve a cobrar vigencia. Liderados por Eugenio Matte Hurtado y Marmaduke Grove, civiles y militares afines a las juventudes socialistas crean el 4 de junio de 1932, la República Socialista de Chile, con el propósito de procurar justicia social al pueblo y los trabajadores. Si bien, debido a los conflictos y divisiones internas, la iniciativa no prosperó, fue un antecedente importante para el gobierno del Frente Popular (1938-1941), bajo el cual, encabezado por Pedro Aguirre Cerda, el Estado dejó de subsidiar las iniciativas privadas y el mercado, enfocó la conducción de la economía y la producción nacional hacia el mercado interno. No obstante, la necesidad de importar tecnología, insumos y bienes de capital que la misma ISI demandaba, hacía que la economía chilena no lograra desprenderse de su dependencia hacia el exterior.⁶

⁶ “La mayor parte de esta industrialización destinada a substituir las importaciones correspondió a los artículos de consumo, que representaron el 95 por ciento de la producción manufacturera chilena a finales del decenio de 1940. Con todo, aunque los productos manufacturados para el consumo descendieron como porcentaje de las importaciones, la industria chilena siguió dependiendo mucho del extranjero en lo que se refería a materias primas, artículos semielaborados, piezas, capital y tecnología; más de una cuarta parte de los productos primarios que usaba la industria nacional procedía del extranjero” (Bethell, 1991: 220)

Sumado a ello, ya en la década de 1950, el modelo comenzó a dar señales de agotamiento a raíz de los diversos desajustes que se producían entre los distintos sectores productivos y la baja en los índices de crecimiento productivo, entre otros. Esta tendencia se mantuvo durante los gobiernos de Carlos Ibáñez, Jorge Alessandri y Eduardo Freí Montalva, y terminaría –junto con el modelo mismo– tras el golpe de Estado al gobierno de Salvador Allende (Salazar y Pinto, 2002).

Durante el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964) se redujo la injerencia del Estado en la conducción de la economía y ésta tendió a abrirse a los intereses extranjeros, mientras que el gobierno de Eduardo Freí Montalva (1964-1970) se abocó al crecimiento económico y la redistribución de la renta a través de reformas estructurales como la “chilenización” de la gran minería de cobre y un moderado proceso de reforma agraria.

El año 1970 la conducción de la política chilena daría un giro importante. La elección como presidente de la república de Salvador Allende implicó un fuerte golpe a los intereses de los sectores dominantes. Entre los motivos que explicarían este vuelco se cuentan: la articulación de la izquierda socialista y comunista con el Partido Radical, la presencia de dos candidatos, uno de centro y otro de derecha, y las insalvables diferencias entre la derecha y la Democracia Cristiana. Así como señala Gómez Leyton (2010), a partir del año 1967 y como consecuencia de la crisis de hegemonía experimentada por las clases dominantes, se habría dado inicio a una crisis orgánica del Estado chileno.

El gobierno de Salvador Allende (1970-1973) constituye sin duda el intento más radical en la historia de Chile en cuanto a reformulación del proyecto nacional. Sin apartarse del marco legal e institucional existente (lo cual no estuvo exento de controversias al interior de la Unidad Popular),⁷ Allende pretendía sustituir la estructura económica de la época y acabar con el dominio del capital monopolista extranjero y nacional y del latifundio. Pese a estar en desventaja en el congreso y a las divisiones internas en la Unidad Popular, el gobierno de Allende consiguió llevar a

⁷ Y es que para el sector más extremo del Partido Socialista y el MIR, la opción gubernativa resultaba ingenua, pero “Allende y los partidarios de “la legalidad burguesa” sostenían que el Estado burgués chileno les había permitido llegar por medio de las elecciones al triunfo, y que debían por tanto situarse en ese horizonte y aprovechar exhaustivamente todo lo que pudiera dar de sí el Estado burgués para su transformación en socialista, valiéndose hasta de los últimos “resquicios legales”” (Góngora, 1981: 131).

cabo el aumento de salarios, la nacionalización de las minas de cobre, la profundización de la reforma agraria y la estatización de algunos capitales privados lo cual implicó una sustancial baja en la inversión privada y, consecuentemente, un descenso de la producción en los años 1972 y 1973.

Esas medidas no pasaron desapercibidas ni resultaron inocuas a ojos del gran capital nacional y el capital extranjero. Marini (1976) señala que la percepción no fue la misma en el caso de la pequeña y mediana burguesía, a quienes el aumento en la demanda de bienes (no sólo de consumo, sino también suntuarios) por parte de las capas medias y los sectores asalariados, resultó inicialmente beneficiosa. No obstante, el incremento de las ganancias y la mayor dinamización de la economía chilena, la actitud adoptada por los empresarios de no reinvertir sus dividendos en la ampliación de la producción, sumada al boicot y el proceso de especulación llevado a cabo por las clases dominantes, tendió a generar progresivos niveles de desabastecimiento, junto con la proliferación de huelgas y tomas de fábricas y terrenos rurales, aunado a la labor de la prensa opositora al gobierno, que desempeñó un rol significativo en la difusión del temor a las aspiraciones a futuro de la Unidad Popular, lo que generó un clima de exasperación de los ánimos políticos e incertidumbre en la población, que se vio exacerbado tras la paralización –durante un mes– del sector abocado al transporte por carretera, en octubre de 1972, así como la intermitente presencia e intervención de los militares en el congreso, el cual alcanzó su clímax el 22 de agosto de 1973, cuando la Cámara de diputados acusó de anticonstitucional e ilegal la política de Allende, incitando a los militares a defender la Constitución.

El Golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas chilenas, fue la reacción de un sector social, también con capacidad histórica, que no estaba dispuesto a entregar ni a renunciar a su proyecto de sociedad. Los grupos dominantes para poner fin a la experiencia de modernización socialista, recurrieron a las fuerzas armadas, o sea, al poder de las armas. La crisis de 1973 constituye una crisis de sociedad, en la cual se enfrentaban en lo sustantivo, los dos proyectos de sociedad que se gestaron y se desarrollaron desde los inicios del siglo XX chileno (Gómez Leyton, 2010: 27).

De acuerdo a Gómez Leyton (2010), el 11 de septiembre de 1973 no sólo el derrocamiento de Salvador Allende y la UP, sino también del poder social y político que trabajadores y sectores subalternos habían construido a lo largo del siglo xx. Desde las décadas de los veinte y treinta, se trató de

un proyecto que no habría sido otra cosa –según el autor– que el proyecto de la “modernidad socialista”, por lo tanto, el periodo 1920-1930 sería el inicio del siglo xx chileno, pues marca el comienzo del proyecto de “modernidad popular”, cuyos actores principales habrían sido el partido político de masas y la figura de los sindicatos. En este sentido, el año 1970 se perfila como una fecha clave, pues el triunfo político de Allende habría sido reflejo de la acumulación de poder de dicho proyecto. En esta lógica, el golpe de Estado es producto del choque entre dos proyectos distintos de modernización (el socialista y el capitalista).

Pese a que en sus inicios no había un acuerdo respecto al derrotero ideológico que tendría el gobierno de la Junta Militar impuesto tras el golpe de Estado, estaba claro que para forjar un nuevo proyecto nacional era necesario liquidar los movimientos sociales y políticos, por lo que se desechó la participación de la totalidad de la clase política nacional, a fin de conseguir la estabilización económica y social del país. Para el momento en que Augusto Pinochet asumió la presidencia (1974), la Declaración de Principios del Gobierno establecía la condena al marxismo y al estatismo, mientras proclamaba respeto por el cristianismo y el nacionalismo, además de que se “reconocían los derechos naturales de la persona humana como superiores a los de la sociedad y el Estado, ya que aquellas –decía es un ser substancial y éstos son seres accidentales de relación” (Góngora, 1981: 133).

Junto con lo anterior, la conducción del país sostuvo la privatización y la “libertad” económica como principales consignas a la hora de realizar transformaciones como, por ejemplo, el desentendimiento del Estado en tanto mediador de los conflictos laborales, la promulgación de la Ley General de Universidades de 1980 o el cese del proteccionismo aduanero y los subsidios a ciertas ramas de la producción. Para que todos estos cambios –llevados a cabo en medio de un considerable despliegue de violencia y represión– pudieran ser incorporados a la sociedad, fue necesario legitimarlos por medio de la adopción de un modelo económico y político nuevo.⁸

⁸ “Las doctrinas con las cuales estaban más familiarizados los militares eran las de la «seguridad nacional». Se las ha definido como la creencia en el concepto de la nación como una «esencia», «tradición» o «espíritu» que ha sido dañado por la demagogia política y se ve amenazado por la agresión antinacional; en la aceptación de las desigualdades sociales como orden natural de las cosas, en la idea del gobierno como sistema autoritario; y en la definición del marxismo como principal enemigo de la sociedad. A pesar de su vaguedad, estas ideas autoritarias contribuyen a explicar por qué los militares no aceptaron simplemente la tarea de derrocar a Allende, sino también la de construir una sociedad

En cuanto a la conducción económica, la idea fue restaurar los vínculos con el sistema capitalista mundial, para lo cual se estableció una política de libre mercado y se redujeron las funciones del Estado en la conducción de la economía. Además, a fin de ampliar la esfera de acción del sector privado, le fue concedida una creciente injerencia en captación de ahorros y en la asignación de créditos.⁹ Se observa, entonces, que las transformaciones en el ámbito económico (1973-1990) posibilitan el asentamiento del nuevo patrón de reproducción del capital.¹⁰ Entre los años 1975 y 1980 se produce la formación de estructuras básicas para el desarrollo del nuevo patrón, en el cual prima el capital mercantil y financiero, así como potencia la capacidad exportadora. Dentro de este movimiento, el sector encargado de revitalizar el proceso de acumulación de capital sería el ligado a la producción de materias primas (minería, actividades forestales) y la producción de alimentos.

En definitiva, se llevó a cabo un cambio radical en el proyecto nacional, el cual no habría sido posible sino sólo por la imposición de la fuerza y las transformaciones económicas llevadas a cabo por el grupo de intelectuales a cargo de la política económica de la dictadura, los *chicago boys*, sino que, además, se desarrolló una discursividad ideológica que permitió dar legitimidad a las reformas estructurales. De acuerdo a Moulian y Vergara (1981), ideas clave en este sentido fueron el haber presentado el derrotero tomado por el gobierno militar como la única vía para salir del estancamiento económico, sustentado además por el supuesto “carácter científico” de su programa y el vínculo que se pertenecía realizar entre la libertad política y la libertad económica, entre otros.

Aún así, la ideología del liberalismo que impulsaban los monetaristas debía superar la evidente contradicción entre la libertad económica que pregona y el autoritarismo político del régimen militar. Dicha conci-

nueva en la cual las divisiones políticas serían substituidas por la acción común en pos de la grandeza nacional” (Bethell, 1991: 296).

⁹ “La nueva política favorecía abiertamente a las fracciones más significativas de la burguesía que operaban en la órbita financiera y que mantenían vinculaciones con el capital financiero internacional o que estaban vinculadas a las actividades mercantiles y de exportación. (...) las modificaciones en la política económica implicaban un cambio de los sectores líderes del proceso de acumulación. La industria es desplazada como sector líder por las actividades primario-exportadoras y las industrias procesadoras de recursos naturales, las que en adelante deberían conducir el proceso de expansión económica” (Moulian y Vergara, 1981: 873).

¹⁰ Sobre este concepto véase de Jaime Osorio (2014).

liación fue conseguida al atribuir mayor preponderancia a la libertad económica y al definir a la libertad política como un derivado de ésta. La lógica que se desprende de ello, indica que no habría sido posible ni razonable:

permitir el desarrollo de lo derivado cuando todavía no ha madurado el sustrato o la base que necesita para afirmarse sólidamente. La verdadera libertad política es aquella que se condiciona a la económica; poner en peligro esta última significa destruir el orden social tomando el partido de la igualdad contra la libertad. [De esta manera] El éxito ideológico del liberalismo económico (...) justifica en el nivel teórico la exclusión permanente de ciertos grupos: no pueden formar parte de la democracia aquellos que la niegan en su esencia: la libertad económica (Moulian y Vergara, 1981: 895).

En este sentido, a pesar de que el gobierno de Pinochet fue una dictadura, paradójicamente una de las ideas fuertes era el de “libertad”. Y si bien la supuesta libertad económica era algo que se encontraba en marcha a través de las reformas, la libertad política aspiraba a alcanzar el ideal de restauración de la democracia. Ello, ante la presunta amenaza que habría implicado el gobierno socialista de Salvador Allende, pues el miedo y el rechazo frente a términos e ideas como “dictadura del proletariado”, así como el temor instaurado en la población frente a la incertidumbre existente en el periodo, condujeron a generar una identificación negativa por oposición frente al proyecto de la Unidad Popular.

Pero la libertad devenida del marco constitucional instaurado por la dictadura y que fue preservado por los posteriores gobiernos de la Concertación, se remite en esencia a la idea de que en tanto “ciudadanos” todos los “individuos” son iguales y su capacidad de injerencia, por medio del voto, es la misma. Sin embargo, en términos prácticos lo que ocurrió fue un sometimiento institucionalizado del trabajo al capital a fin de conseguir competir en una economía abierta. Según el análisis de Moulian (2002), durante los gobiernos de la Concertación el lema “crecer con equidad” se vio aplastado por las cifras que evidencian la enorme desigualdad en la distribución de los ingresos y la baja participación de los sectores más pobres en la economía, pese al aumento del gasto social si se compara con lo ocurrido durante el gobierno de Pinochet.

¿CAMBIÓ ALGO TRAS EL RETORNO A LA DEMOCRACIA?

Es posible rastrear el estrecho vínculo entre economía y política desde los inicios de Chile como nación formalmente independiente. La continuidad que se dio a la directriz económica que se desarrolló desde la colonia, sumada a la conducción política de Portales, permitieron establecer no sólo una clase dirigente unificada sino, además, un proyecto nacional conjunto, que si bien obedecía a los intereses de las elites político-económicas, pasó a representar el interés general de la sociedad. Asimismo, la prosperidad económica tras la incorporación de nuevos mercados condujo al establecimiento de la República Liberal. El afianzamiento del Estado chileno estuvo, pues, directamente relacionado con el pulso económico del siglo XIX: la Guerra del Pacífico y la “Pacificación de la Araucanía” no sólo marcaron importantes hitos en la historia política y bélica del país, sino que además resultan cruciales para intentar entender la conformación estatal.

Ya en el gobierno de Balmaceda se plantea, por ejemplo, la preocupación por la dependencia del mercado internacional que conlleva el derrotero tomado en la conducción económica del país. Y la disputa por el tipo de proyecto se evidencia tras el surgimiento de la República Socialista. Al observar los gobiernos de Alessandri Rodríguez, Freí Montalva y Allende, queda aún más patente la pugna respecto al tipo de sociedad que se deseaba, no obstante, es una discusión que culmina y se vacía de sentido tras el golpe militar de 1973 y los posteriores gobiernos concertacionistas.

Al respecto cabe señalar que, si bien en el contraste con otras experiencias latinoamericanas como la de México, por ejemplo, a menudo tiende a representarse el desarrollo político chileno de manera un tanto lineal, pues subyace la idea de que desde la independencia el despliegue de la política tendió hacia la democracia, autores como Tomás Moulian (1982) y Tomás Gómez Leyton (2010) advierten que el proceso no estuvo carente de disputas. Para Moulian, por ejemplo, la promulgación de la *Ley de Defensa de la Democracia* (que entre otros, decretaba la ilegalidad del partido comunista) implicó un claro retroceso en la democratización de la política chilena (Moulian, 1982:110), mientras que para Gómez Leyton, en Chile sólo se podría hablar de democracia “plena” durante el periodo 1967-1973, pues en la mayor parte del tiempo lo que habría primado sería la construcción de regímenes políticos que combinaban formas democráticas con formas autoritarias (Gómez Leyton, 2010: 41).

La idea del éxito asociada al desarrollo económico es una constante que perdura desde la independencia hasta la actualidad. Sin embargo, hay pasajes dentro del desarrollo político de la nación en donde ésta adquiere distintos matices y sentidos. Algo similar ocurre con la idea de democracia. Portales era consciente del cariz autoritario de su gobierno, sin embargo, lo postulaba como necesario a fin de poder alcanzar un nivel de desarrollo que hiciera factible el funcionamiento de la democracia. Con Pinochet vuelve a repetirse la fórmula: el autoritarismo como plataforma previa a la democracia. La democracia se establece como la bandera de lucha, la gran meta e ideal a alcanzar. ¿Pero qué sucedió una vez que Chile consiguió la tan anhelada democracia? ¿Hubo cambios sustanciales?

Sin duda a nivel discursivo y simbólico el cambio resultó evidente, pero no sucedió lo mismo a nivel estructural. A la fecha, la Constitución de 1980 continúa en vigencia y los gobiernos de la Concertación profundizaron y expandieron el legado económico de la dictadura. La idea del éxito asociada al desarrollo económico se inyectó en cada uno de los ciudadanos, a través de *slogans* que identificaban al país como un “jaguar”, pujante en lo económico y por medio de políticas concretas que estimulaban el consumo por medio del crédito.¹¹ De este modo, durante los noventa, mayor cantidad de chilenos podían tener cierta participación en el mercado de bienes suntuarios, pero a costa de un endeudamiento creciente.

De acuerdo a Borón (2003), desde los años setenta se ha observado una extrema fragilidad de las instituciones democráticas en América Latina. Incluso en países como Chile y Uruguay, el avance del capitalismo periférico habría requerido “el desmantelamiento sistemático de las instituciones, prácticas y valores tradicionalmente asociados con la democracia burguesa” (Borón, 2003: 85). Se advierte entonces que el liberalismo económico demanda y promueve el despotismo político. Lo que Borón sostiene es que el significado sustantivo de la democracia se evaporó, incluso dentro del discurso de los teóricos liberales, fue reducida a un procedimiento desvinculado de contenido concreto y subsumido a mera ideología legitimadora de la supremacía del capital. Así, la democracia se habría convertido en un mecanismo formal de organización del poder político.

¹¹ Mayores reflexiones sobre este fenómeno económico, social y cultural han sido desarrolladas por Tomás Moulian (2002 y 1999).

La idea de que la democracia “funciona” se ve reforzada con experiencias como la elección de Sebastián Piñera como presidente de la república para el periodo 2010-2014, en el sentido de que es un sistema que da cabida a la alternancia de las fuerzas políticas en el poder. Sin embargo, en general las tendencias económicas son las mismas desde el gobierno militar. Por ejemplo, el incremento del valor de las exportaciones es, junto con el caso de México, uno de los más importantes dentro de América Latina, lo cual se traduce en la profundización del carácter exportador del patrón que sigue el capital para reproducirse en la economía chilena y que da continuidad a la pauta marcada por el gobierno de Pinochet de incrementar el peso del sector primario exportador, en desmedro de la producción industrial.

Tabla 1. Valor de las exportaciones totales de bienes y servicios
(Millones de dólares)

Año	Argentina	Brasil	Chile	Colombia	México	Uruguay	Total América Latina
1980	9897.0	21797.4	5968.0	5328.0	22622.0	1526.0	106794.0
1985	10047.0	27672.5	4496.0	4505.0	31566.0	1257.1	112707.7
1990	14800.0	35165.9	10220.8	8679.0	48805.0	2158.5	168008.8
1995	24987.3	51435.1	19357.9	12293.9	89321.1	3506.8	268093.6
2000	31276.5	64583.8	23293.2	15808.2	179833.0	3659.5	415185.4
2005	47021.2	134355.9	48401.0	24397.0	230299.3	5085.4	534180.3
2009	66562.6	180745.0	62242.4	38222.0	244550.3	8557.2	782043.2

Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico 2010

Al no depender de un mercado interno para la realización de su producción, entre las diversas consecuencias que conlleva dicho patrón se cuenta la precarización de las condiciones de existencia de los trabajadores.¹² Se trata de un “abandono” que, orquestado desde el Estado, no sólo se ve reflejado en la relación capital-trabajo, el castigo de los salarios o las condiciones laborales —cuya regulación actual fue establecida por José Piñera en el Plan Laboral de 1979, lo que impuso un marco legal y jurídico que redujo la capacidad de la acción colectiva y promovió la despolitización sindical (Narbona, 2015)—, además de diversos aspectos de la vida de los trabajadores como la salud o la educación, entre otros.

¹² Para profundizar en este tema, ver Osorio, Jaime (2009): “Explotación redoblada y actualidad de la revolución”, México, ITACA-UAM.

Tabla 2. Gasto público en educación (*Porcentaje del PIB*)

1980	4.1
1985	3.3
1990	2.7
1993	2.8
1997	3.6
1999	3.9
2000*	3.7
2003*	3.9
2005*	3.2
2007*	3.2
2009*	4.2

Fuente: Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe, CEPAL 2005

(*) Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe, CEPAL 2015

Como ha sido señalado con anterioridad, el vínculo entre lo económico y lo político resulta clave no sólo en la construcción y afianzamiento del Estado chileno, sino en la definición del proyecto nacional. Tras el golpe del 73, por ejemplo, la idea de que la libertad política sería un derivado de la libertad económica toma fuerza, y sin embargo, el nexo pareciera difuminarse a la hora de contrastar este tipo de ideas con las condiciones de vida y la enorme desigualdad, situaciones en donde lo económico y lo político se representan como ámbitos separados y distintos.

Y es que la clave de esta escisión en el capitalismo reside en que, en dicho sistema, las relaciones sociales de producción se dan entre hombres *libres e iguales* o individuos *desnudos* como los refiriera Poulantzas (2007). Ya no más esclavos o siervos, de forma que lo político (la dominación) ya no interferiría —en apariencia— en lo económico. Sin embargo, es ese marco jurídico establecido al alero del Estado capitalista el que asegura la continuidad del ciclo capital-trabajo y la extracción de plusvalía.¹³ Los hombres libres, despojados de medios de producción, voluntariamente se convierten en asalariados y aceptan las *condiciones legales* que definen,

¹³ “las actividades concretas del Estado se definen como resultados de procesos políticos, que ciertamente tienen por fundamento el proceso económico de reproducción y las relaciones entre las clases, pero que están marcados y modificados concretamente por la política y por la fuerza de las clases o partes de clases, de los grupos individuales o de los monopolios” (Hirsch 1979: 65 citado en Míguez, Pablo, 2010).

concretan y legitiman la explotación. La división social del trabajo y la consecuente separación del productor directo de los medios de producción daría origen a la “autonomía específica” de lo económico y de lo político, “separación” característica del capitalismo (Marx y Engels, 1956). Sin embargo, estas divisiones propias del capitalismo, es decir, estas relaciones de poder que se condensan en el Estado, son “suturadas” por el rol que cumple el aparato de Estado al crear y reforzar la idea de nación, de una comunidad imaginada de individuos libres e iguales.¹⁴

De esta manera, que dicha profundización pasara sin mayores objeciones de parte de la “ciudadanía” se relacionan con fenómenos tanto políticos como culturales. Entre otros, si bien el retorno a la democracia pretende dar un giro respecto al gobierno dictatorial, se encuentra limitado no sólo en lo práctico por mecanismos como la constitución de 1980 o los senadores designados que contrarrestaban el poder del gobierno en el parlamento, sino que, a nivel discursivo e ideológico, el panorama que se enfrenta dista mucho al de gobiernos anteriores. A las intensas campañas ideológicas llevadas a cabo a nivel nacional por los militares, se suma la caída de la URSS. La “derrota” de los socialismos reales dejaría a la izquierda desmantelada no sólo en lo práctico, sino también a nivel discursivo. La coalición, de “centro-izquierda”, que asume la conducción del país tras la salida de Pinochet, debió lidiar con disputas internas respecto a la construcción de una identidad política “progresista” que se centra en la ampliación de las libertades individuales y la cultura, por sobre el debate del modelo económico (Garretón, 2012).

Dicha discusión pareciera ser relegada a un “ámbito técnico” y aparentemente escindido de la política que, cada vez, se restringe más a el voto ciudadano y la figura de los políticos y su accionar individual. Como bien señala Gómez Leyton, ello se debe en parte a que las decisiones sustanciales son tomadas a un nivel en donde no existe injerencia ciudadana efectiva.

¹⁴ La separación entre forma Estado y forma aparato da pie, de acuerdo a Jaime Osorio (2012), a un *hiato teórico* que hace posible la negación de la explotación y el dominio. No obstante, en el capitalismo, el manejo del aparato Estado ha presentado además la particularidad de que las clases dominantes han estado dispuestas a delegar su administración a otros sectores sociales, lo que dio paso a la conformación de una *clase reinante*, cuya composición social no se condice necesariamente con la de las clases dominantes. De acuerdo a Osorio, este *hiato social* presente en el Estado capitalista, resulta clave, pues junto con el hiato teórico, se orienta a negar el dominio clasista que se ejerce desde el Estado.

El problema sustantivo de la democracia posautoritaria nacional estriba en que los asuntos públicos son discutidos y analizados por las “élites de poder”, ya sean, economistas, políticas y académicas. Estas son las únicas que se sienten capacitadas para discutir los problemas de la sociedad. En los recintos donde se reúnen las distintas “élites de poder” la voz de los ciudadanos y ciudadanas no se escucha. Para eso están los expertos y sus recetas (Gómez Leyton, 2010: 288).

CONCLUSIONES

A través de esta breve revisión ha sido posible observar que, desde su independencia, la economía y la política chilenas han mantenido un estrecho vínculo. Este nexo ha perdurado hasta la actualidad, sin embargo, la forma que adquiere y con qué se representa a través de la figura del Estado ha cambiado. Ello obedece en parte a una tendencia general del Estado capitalista, pero que debe ser vista en relación al contexto latinoamericano y chileno en particular, pues en cada nivel es posible observar características específicas del desarrollo regional y nacional que, en cierto sentido, les condicionan. En el caso específico de Chile, estos cambios son observables en las limitaciones legales que se han establecido para el Estado ante el capital privado extranjero y nacional y que se expresan en una inclinación socioeconómica que se impone a partir del golpe de Estado de 1983, así como en el discurso que a nivel sociocultural le otorga legitimidad y estabilidad al modelo. Un proyecto que se traduce en un patrón de reproducción del capital de carácter exportador y que potencia la producción de materias primas y alimentos, así como el uso intensivo de recursos naturales, y que es presentado como la alternativa única para asegurar el “bien común” de los “ciudadanos”.

Siendo así, si bien tras el retorno a la democracia, del *gris militar* hubo efectivamente una transición al *multicolor concertacionista*, los cambios realizados no afectaron la estructura forjada durante la dictadura sino, más bien, tendieron a profundizarla, mientras la discusión en la arena política se concentró en los partidos y las fuerzas políticas que llevan a cabo la reproducción —y profundización— de dicho proyecto.

BIBLIOGRAFÍA

- BETHELL, L. ed. (1991); *Historia de América Latina, tomo XV, "El Cono Sur desde 1930"*. Cambridge: Cambridge University Press.
- BORÓN, A. (2003); *Estado, capitalismo y democracia en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.
- CUEVA, A. (2009); *El desarrollo del capitalismo en América Latina*. México: Siglo XXI.
- DE RIZ, L. (1979); *Sociedad y política en Chile: de Portales a Pinochet*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- GARRETÓN, M. (2012); *Neoliberalismo corregido y progreso limitado. Los gobiernos de la Concertación en Chile, 1990-2010*. Santiago de Chile: Editorial ARCIS-CLACSO.
- GÓMEZ LEYTON, J. (2010); *Política, democracia y ciudadanía en una sociedad neoliberal (Chile: 1990-2010)*. Santiago de Chile: Editorial ARCIS-CLACSO.
- GÓNGORA, M. (1981); *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX*. Santiago: Eds. La Ciudad.
- KOSIK, K. (1962); *Dialéctica de lo concreto. Estudio sobre los problemas del hombre y el mundo*, consultado el 02.02.2016, en http://blogs.fad.unam.mx/asignatura/nadia_osornio/wp-content/uploads/2014/05/Dialectica-de-lo-concreto.pdf
- MARINI, R. (1976); *El reformismo y la contrarrevolución (Estudios sobre Chile)*. México: Ediciones Era.
- MARINI, R. (1977); *Dialéctica de la dependencia*. México: Ediciones Era.
- MARX, C. y ENGELS, F. (1956); *La ideología alemana*. Buenos Aires: Lautaro.
- MIGUÉS, P. (2010); "El debate contemporáneo sobre el Estado en la teoría marxista: su relación con el desarrollo y la crisis del capitalismo", en *Estudios Sociológicos*, vol. XXVIII, núm. 84, septiembre-diciembre, México: El Colegio de México. Consultado el 23.02.2016, en <http://www.redalyc.org/pdf/598/59820671001.pdf>
- MOULIAN, T. (2002); *Chile Actual. Anatomía de un mito*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- MOULIAN, T. (1982); "Desarrollo político y Estado de compromiso. Desajustes y crisis estatal en Chile", en *Colección Estudios CIEPLAN*, No. 8, Estudio N° 64, consultado el 10.02.2016, en http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/124/Capitulo_5.pdf
- MOULIAN, T. y VERGARA, P. (1981); "Estado, ideología y políticas económicas en Chile: 1973-1978", en *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 43, no. 2, consultado el 03.09.2015, en www.jstor.org/stable/3539928

- OSORIO, J. (2012); *Estado, biopoder, exclusión. Análisis desde la lógica del capital*. Barcelona: Antropos Editorial, México: UAM.
- POULANTZAS, N. (2007); *Poder político y clases sociales en el Estado Capitalista*. México D.F.: Siglo XXI editores.
- SALAZAR, GABRIEL y PINTO, JULIO (1999); *Historia contemporánea de Chile I. Estado, legitimidad, ciudadanía*. Santiago de Chile: Lom Ediciones.
- VITALE, L. (1980); *Interpretación Marxista de la historia de Chile. De semicolonias inglesa a semicolonias norteamericana (1891-1970)*. Barcelona: Editorial Fontamara.